

El mandatario socialista mantiene múltiples frentes abiertos:

Socios de la izquierda doblan la mano a Sánchez, que termina contrato de armas con Israel

El Ejecutivo tomó la decisión para evitar un quiebre en su coalición de gobierno, clave para conservar su fuerza en el Parlamento.

EVA LUNA GATICA

Con el objetivo de apagar la crisis que estalló en los últimos días en el seno de su coalición, el Presidente español, Pedro Sánchez, rescindió ayer el contrato de compra de munición que tenía con una empresa israelí, que había desatado feroces críticas del socio minoritario de su coalición, Sumar (izquierda radical).

La disputa se desató, además, cuando se cumple un año desde que el mandatario publicó una carta en la que manifestaba que podría dejar el cargo —lo que no ocurrió—, y desde entonces se han multiplicado los frentes que tiene en la justicia y con sus aliados.

“Tras haber agotado todas las vías negociadoras, la Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda y los ministerios competentes han decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems”, el cual era de unos 7,8 millones de dólares, informó ayer el Ejecutivo. La decisión fue celebrada por la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, quien había dicho que el acuerdo “vulneraba la legalidad internacional”.

España no puede hacer “negocios con un gobierno genocida (...) que está masacrando al pueblo palestino”, había dicho la izquierdista a la prensa, quien antes de la anulación aseguró que no aceptaría otra solución de parte del gobierno, y que también estaba enfrentada a este por la decisión del Consejo de Ministros de aprobar un plan para elevar el gasto en defensa español en unos 12.000 millones de dólares, para llegar al 2% del PIB como exige la OTAN. La situación se agravó aún más para Sánchez cuando la formación Izquierda Unida (IU) amenazó con evaluar su permanencia en el Ejecutivo si no se ponía fin al contra-



SÁNCHEZ se enfrentó a las críticas de su vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

to, desatando una crisis de “máximo nivel” en la coalición, señaló la prensa española.

El gobierno argumentaba que anular el contrato —con el que el país buscaba adquirir 15 millones de balas para la Guardia Civil y que se había acordado sin que Sumar lo supiera— supondría grandes pérdidas para las arcas fiscales, ya que implica “abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado”, dijo el Ministerio del Interior, que estaba a cargo de la compra. Pero ante la ola de críticas el Ejecutivo decidió revocar la decisión, sobre todo para evitar una crisis interna y pre-

servar la coalición que tiene con la izquierda, que necesita para impulsar su agenda en el Parlamento; así como para mantener su credibilidad, ya que fue el propio Pedro Sánchez quien garantizó en el Congreso que no haría contratos de compraventa de armamento con empresas israelíes mientras siga la guerra en Gaza.

“Es un ejemplo más de la debilidad parlamentaria del gobierno y refleja la deficiente coordinación interna”, comenta a “El Mercurio” Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedrático emérito de ciencia política de la Universidad de Barcelona. “El PSOE depende del

apoyo de varios partidos, y en el gobierno de coalición, Sumar está compuesto por varios pequeños partidos. Es evidente que el PSOE no puede gobernar como quería y lo ha de negociar todo. A esto se suma el hecho de que la mayoría de la sociedad española es crítica con el gobierno de Benjamin Netanyahu y su actuación en Gaza”, agrega Pau Canaleta, experto español en comunicación política.

Y si bien el Presidente parece haber desactivado, de momento, el conflicto interno la decisión le está abriendo un frente con Israel, que ayer condenó “enérgicamente” el término del contrato y co-

■ Feijóo: “¿Quién paga?”

Cuando estalló la polémica, el miércoles, fuentes del Ministerio del Interior habían dicho que el contrato con la empresa israelí seguía adelante ya que los servicios legales del Estado desaconsejaron rescindir, argumentando que, de hacerlo, habría que abonar el dinero sin recibir el material.

Ayer, tras confirmar la anulación del contrato, fuentes del gobierno dijeron que la abogacía del Estado y los ministerios implicados “ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones”.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), principal formación de oposición, criticó con dureza al gobierno de izquierda.

“Cuando un Estado hace un contrato con otro Estado, hay que cumplir ese contrato”, dijo Feijóo, en referencia a que IMI Systems pertenece al Estado israelí. “¿Cuánto vale la rescisión de ese contrato? ¿Quién va a pagar la rescisión de ese contrato?”, se preguntó.

mentó que “está sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos”. Según dijo a EFE un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, con su decisión el gobierno español “continúa en el lado equivocado de la historia” y se posiciona “en contra del Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes”.

El portavoz destacó que se trata de un incumplimiento unilateral del contrato y criticó asimismo que el Ejecutivo español anunciara que se abstendrá de futuros acuerdos de defensa con empresas israelíes.

“Ese caso lleva más de un año y todavía no hay un elemento que permita decir que hay un delito”, comenta Jaime Ferri Durá, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. “Con este asunto se trata de desgastar a Sánchez hasta que caiga”, añade el experto Rodríguez-Aguilera.

A esto se suman otros frentes, como la investigación contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, acusado de la presunta filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja

de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), en una causa por fraude. El caso ha desatado fuertes críticas en España, ya que a pesar de la denuncia, el funcionario no ha renunciado a su cargo. También está el escándalo por corrupción que involucra al exministro socialista José Luis Ábalos, quien está acusado de tráfico de influencias y cohecho en una trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, y que llevó al PSOE a expulsar de sus filas al político, quien era considerado la “mano derecha” de Sánchez.

“Sánchez va a seguir aguantando, pero al precio de no legislar casi nada. Casi su único argumento es impedir (retrasar) un gobierno PP-VOX, pero esto es ya del todo insuficiente. Creo que el plan será el de hacer coincidir las elecciones generales con las andaluzas de la primavera de 2026, pues veo imposible aguantar hasta 2027”, añade Rodríguez-Aguilera.

■ COSTO

El gobierno de Sánchez tendrá que pagar unos 7,8 millones de dólares a Israel por poner fin al contrato de compra de armas.

■ Conflictos pendientes

Los problemas de Sánchez no se reducen al ámbito político. Ayer se cumplió un año desde que hizo pública una carta en la que comunicaba que estaba evaluando abandonar su cargo (en el que está desde 2018), después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios tras una denuncia del colectivo Manos Limpias, que tiene vínculos con la extrema derecha, y cuyas alegaciones estaban basadas en notas periodísticas; pero que descartó tras cinco días de reflexión. Y desde entonces ha mantenido su pretensión de terminar la legislatura y llegar a las elecciones de 2027, mientras continúa la investigación contra su esposa.